



HOMICIDIO CALIFICADO

Sumilla. Los hechos sucedieron en un lugar –de Loreto– donde se hace inaccesible encontrar los cuerpos de los agraviados, dada la diversidad de ecosistemas climáticos, y biodiversidad de especies de animales y plantas entre otros, con presencia de depredadores. Su ubicación no ha sido posible, pero esto no es fundamento para alegar que no se configura el delito de asesinato, cuando a la fecha han transcurrido más de diez años a la data de los hechos y nunca aparecieron.

Lima, treinta de octubre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado **ELOY CARITIMARI ARIRAMA** contra la sentencia del uno de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto –de páginas trescientos ochenta y ocho a cuatrocientos siete–, que lo condenó por delito de homicidio calificado y robo agravado, en perjuicio de Antonio de Paula Campos y José Batista Guerrero, a treinta años de pena privativa de la libertad; y ocho mil soles que por concepto de reparación civil deberá abonar a los deudos de los agraviados. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema **PACHECO HUANCAS**.

CONSIDERANDO

✦ HECHOS IMPUTADOS

1. Se atribuyó a **ELOY CARITIMARI ARIRAMA** y otros, que el doce de agosto de dos mil tres, en horas de la noche, cuando los agraviados se encontraban en el interior de un bote en inmediaciones de la quebrada conocida como Escalera-río Yavarí, distrito de Yaquerana, Colonia, Angamos, fueron interceptados por los procesados Eloy Caritimari Arirama, Jaime Vargas Arirama, Michael Bardales Valles y Amílcar Olivera Cuje, quienes se encontraban a bordo de una canoa, y premunidos de dos escopetas de caza, abordaron violentamente la embarcación de los agraviados, procedieron a dispararles causándoles la muerte, para luego arrojar sus

cuerpos al río Yaraví, no sin antes sustraerles la suma de dos mil quinientos reales brasileños y ciento veinte dólares estadounidenses, posteriormente, escondieron y abandonaron la embarcación en la selva.

✚ ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Colegiado Superior sustentó el fallo condenatorio en los fundamentos siguientes:

2.1. El coimputado, Jaime Vargas Arirama, narró la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos, tanto a nivel preliminar en presencia del fiscal, como en la etapa de instrucción. Señaló que habían coordinado el robo a la embarcación de los agraviados brasileños, a pedido del sentenciado y el día de los hechos, dieron muerte a los agraviados con dos escopetas que había traído el sentenciado, causándoles la muerte en forma instantánea, para posteriormente arrojarlos al río. Luego de lo cual, les robaron el dinero que tenían en la embarcación.

2.2. La incriminación se corrobora con el hallazgo de la embarcación de los agraviados, totalmente en abandono.

2.3. El ~~sentenciado~~ Eloy Caritimari Arirama, ha dado versiones totalmente contradictorias que dan cuenta de su vinculación con los delitos materia de juzgamiento.

✚ FUNDAMENTO DE LOS AGRAVIOS

3. El sentenciado Eloy Caritimari Arirama fundamenta su recurso de nulidad de páginas cuatrocientos dieciséis, en los motivos siguientes:

3.1. Las pruebas de cargo, como son la incriminación del coacusado Jaime Vargas Arirama, acta de verificación y hallazgo y registro domiciliario, no acreditan su responsabilidad penal, más aun cuando dichas diligencias se realizaron sin la presencia del representante del Ministerio Público.

3.2. El coimputado Jaime Vargas Arirama, en el juicio oral no ha sostenido la incriminación realizada en la etapa preliminar y sumario judicial.

3.3. No se acreditó la muerte de los agraviados.

3.4. No se acreditó la preexistencia del bien supuestamente robado.

3.5. La imputación de los hechos, no guardan relación con el tipo penal de los delitos materia de juzgamiento, sino con el delito de homicidio calificado, en su modalidad de homicidio para facilitar otro delito (delito fin).

✚ CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE PROCESO

4. El delito de homicidio calificado, se encuentra previsto en numeral dos, del artículo ciento ocho, del Código Penal: "[...] Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años, el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: [...] 2. Para facilitar u ocultar otro delito".

5. El delito de robo agravado se encuentra previsto en el artículo ciento ochenta y ocho concordado con los numerales dos, tres, cuatro y cinco, concordado con el último párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal, que prescribe:

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años [...]. La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: 2. Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga [...] La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

✚ FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. El motivo primero expresa la oposición a la legitimidad de la prueba de cargo. Sostuvo el recurrente que no estuvo presente el representante del



Ministerio Público, en las diligencias anotadas en el fundamento tres punto uno, de la presente ejecutoria. También reclamó el juicio probatorio en que se sustentó la sentencia impugnada. Estos extremos de la sentencia cuestionada serán materia de pronunciamiento por este Supremo Tribunal.

8. En efecto, se advierte de la manifestación policial del coimputado Jaime Vargas Arirama, que esta llevó a cabo, en presencia del juez de paz del distrito de Yaquerara, pero sin la presencia del representante del Ministerio Público. En esta declaración el sentenciado, narró:

8.1. El ocho de agosto de dos mil tres Eloy Caritimari Arirama (a) "Quevedo", le manifestó que tenía planeado asaltar una embarcación de madera de los brasileños, donde participaría Michael Bardales Valles y Amílcar Oliveira (a) "Zambito". Tenían conocimiento que en el bote habían dos cajas con dinero.

8.2. El mismo día, todos se desplazaron al lugar conocido como quebrada Escalera, inmediaciones desde la cocha, agua abajo río Yavarí lado peruano, en una canoa de propiedad de Eloy Caritimari Arirama, donde permanecieron hasta el doce de agosto de dos mil trece.

8.3. El doce de agosto de dos mil tres, a las veintidós horas aproximadamente, abordaron el bote de madera que bajaba de aguas abajo del río Yavarí con los brasileños, "Zambito" disparó con una escopeta a los dos, al más joven le dio dos tiros y al más viejo solo un disparo, luego de lo cual murieron instantáneamente.

8.4. Luego de producido el hecho, jalaron el bote a la orilla del río para buscar los dos cajones que estaban con dinero. En cuyo interior encontraron dos mil quinientos reales (moneda de Brasil) y ciento veinte dólares estadounidenses. Luego, sacaron a los dos cuerpos para embarcarlos en una canoa que ellos llevaban en su bote para proceder a hundirlos en el medio del río Yavarí frente a la quebrada y seguir con su recorrido por tierra.

8.5. Las armas empleadas fueron dos escopetas que eran de Eloy Caritimari Arirana. Se repartieron lo robado en partes iguales, tocándole al declarante la suma de seiscientos reales brasileños y veinte dólares.



47

9. Es cierto que el coimputado Jaime Vargas Arirama, declaró a nivel preliminar, sin la presencia del representante del Ministerio Público y con la presencia del juez de paz no letrado del distrito de Yaquerana, dado el lugar donde se habrían producido los hechos.

10. A lo dicho, hay que tener en cuenta en este caso que el coimputado Vargas Arirama en referencia, posteriormente declaró ante el juez penal en su instructiva –página setenta y nueve–, con las debidas garantías de ley, es decir, ante el juez penal con presencia del representante del Ministerio Público, diligencia donde no alegó haber dado su relato preliminar bajo restricciones a sus derechos, y procedió a ratificar el contenido de su manifestación policial, es decir, reiteró el contenido de la declaración cuestionada por el recurrente y por lo tanto, ratificó su testimonio de contenido incriminatorio respecto a la forma y circunstancias como planeó asaltar la embarcación donde navegaban los dos agraviados, siendo utilizado para cometer estos hechos la embarcación del recurrente y donde llegó a quitarles la vida a los dos agraviados, mediando para ello escopeta y luego se procedió a arrojar a las dos víctimas al río Yavarí.

11. Igualmente, este Tribunal Supremo como lo hizo la Sala de Mérito, opta por valorar la declaración policial del coimputado Vargas Arirama, porque además fue oralizada en el juicio oral –página trescientos sesenta y nueve–, y sometido al contradictorio conforme al artículo doscientos cincuenta y dos del Código Penal, sin mayor objeción de las partes que por lo demás su contenido fue ratificado ante el juez penal. Siendo así, la declaración policial del coimputado Jaime Vargas Arirama, tiene plena validez para ser valorada por este Tribunal Supremo y su reclamo se desestima.

12. Del mismo modo, se advierte del acta de verificación y /o hallazgo y el acta de registro domiciliario, que no estuvo presente el representante del Ministerio Público, pero sí estuvo presente el juez de paz no letrado. Al respecto, debe precisarse que estas actas constituyen pruebas preconstituidas que por su urgencia e irrepetibilidad no siempre está presente el Ministerio Público, dada la urgencia de llevarse a cabo, como



los lugares donde estas se realizan; sin embargo, estas se legitiman con la incorporación de los órganos de prueba o por su oralización en plenario, como en efecto ocurrió, pues se dio lectura, sin mayor oposición de la defensa del impugnante. En ese sentido, asumen validez para ser valoradas, con los demás elementos probatorios y poder determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal del recurrente.

13. También sostiene el impugnante, que el coimputado Vargas Arirama no ratificó su incriminación en el plenario. Se verifica que el citado antes de continuar con el juicio oral, aceptó íntegramente los cargos atribuidos, sometiéndose a la conclusión de los debates orales y haciendo ejercicio del principio de adhesión. A ello, debe señalarse que el coimputado Vargas Arirama pese a estar notificado válidamente no asistió al juzgamiento, pero su incriminación en su declaración policial, ratificada en su declaración sumarial y oralizada en el juicio oral, tiene entidad suficiente para ser valorado en forma integral con el resto de medios probatorios, dado que en el caso se cuestionó la ausencia de corroboración de la incriminación relatada por el referido cosentenciado.

14. La Sala de Mérito tomó en cuenta las pautas establecidas por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la República, recaída en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, que fija los estándares de valoración de la declaración de un coimputado, que exige "perspectiva objetiva" y "perspectiva subjetiva". Solo será evaluada la perspectiva objetiva en la medida que del recurso de nulidad, se advierte que sus argumentos solo se dirigen en cuestionar tal extremo.

↓ PERSPECTIVA OBJETIVA

15. Se requiere que el relato de alguna forma incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide y de consistencia a lo que narró el testigo impropio. Esto, también se apoya en la jurisprudencia comparada,



como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional Español [STC 91/2008]: "[...] las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otros datos externos [...]".

16. En este sentido, el relato del coimputado Jaime Vargas Arirama, en la etapa policial, reiterado con todas las garantías de ley en la instrucción y oralizado en juicio oral, tiene como datos incriminatorios de consistencia en contra del impugnante: **a)** haber ideado el robo a la embarcación donde los agraviados brasileños realizaban comercio fluvial; **b)** ser el propietario del bote y escopetas que se utilizaron en el robo; y **c)** la forma como dieron muerte a los agraviados y sustrajeron sus pertenencias. Este relato es secuencial en tiempo y espacio, coherente y verosímil que da cuenta del accionar del impugnante conjuntamente con los demás personas que participaron en el delito.

17. Ahora bien, la declaración incriminatoria del sentenciado Jaime Vargas Arirama, se apoya en los siguientes elementos probatorios:

17.1. El acta de verificación y hallazgo del cuatro de setiembre de dos mil tres, de página cincuenta y seis, que da cuenta de la existencia de la embarcación y las condiciones en que se encontraba, como se verifica también del *panneaux* fotográfico de páginas sesenta y cinco a sesenta y siete.

En esta diligencia, donde participaron personal policial y un juez de paz, estuvo presente también el coimputado Jaime Vargas Arirama, quien narró: "que la embarcación fue escondido luego que lo interceptaran con sus cómplices Eloy Aritimari Arirama (a) Quevedo [...] los mismos que victimaron de muerte [...] con la finalidad de sustraer el dinero producto de las ventas [...]".

Esta diligencia, deja constancia que la embarcación donde navegaron los agraviados brasileños el día de los hechos, se encontraba abandonada y escondida a unos doscientos metros al fondo de la boca de la quebrada del río Yavarí, en un lugar cercano de la realización del hecho materia de juzgamiento, como muestra el croquis

de página cincuenta y ocho, lo que apoya la declaración del nombrado coimputado hoy sentenciado Vargas Arirama.

17.2. La declaración plenaria del impugnante Eloy Caritimari Arirama de páginas trescientos cincuenta y cuatro (sesión del seis de abril de dos mil diecisiete), trescientos sesenta y dos (sesión del veinticinco de abril de dos mil diecisiete). Aquí el sentenciado niega ser uno de los autores de los delitos incriminados, pero los argumentos que expone son totalmente incoherentes, incurriendo en contradicciones serias en el relato, que solo explican su conducta procesal, que es evadir su responsabilidad penal. Veamos:

17.2.1. El recurrente Caritimari Arirama es interrogado por el Ministerio Público. Allí señaló de entrada que no conoce a sus coimputados; sin embargo, luego afirma que sabe quiénes son y que viven en una comunidad cercana al distrito de Yaquerana.

17.2.2. El impugnante, pese a señalar que no conoce a sus coimputados, reveló que ellos le solicitaron que les hiciera un transporte a la quebrada Escalera, aseverando que fue víctima de robo agravado de su bote y motor por parte de sus coprocesados; y, que inclusive fue agredido con un madero en la cabeza, donde permaneció dos días en plena selva.

17.2.3. Sostuvo también que al retornar del distrito de Yaquerana, tuvo que retirarse en forma inmediata porque los pobladores lo querían matar. Aquí, señaló tres versiones distintas en lo que respecta a este punto: **1.** lo querían matar para que no hable; **2.** lo querían matar porque le decían que había matado a los brasileños; y **3.** abandonó la Colonia Angamos para ir a trabajar en las actividades de madera.

Es claro que el recurrente en el descargo realizado frente al interrogatorio, no tiene coherencia. Sin embargo, al margen de las graves contradicciones que son evidentes, lo resaltante en el presente caso, es que el impugnante aceptó haber estado en el lugar de los hechos con su embarcación, lo que es un indicio de presencia física,



solo que en fechas distintas al que motiva el presente proceso. Esto tiene apoyo en el acta de hallazgo, pues fue él quien estuvo presente en la diligencia policial donde se divisó la embarcación.

17.3. En este caso es relevante subrayar además lo que fluye del interrogatorio del sentenciado recurrente, que: i) este conocía a los coacusados, es decir, no eran personas extrañas; ii) el recurrente estaba en la selva el día de los hechos; iii) el recurrente tenía una embarcación; y, iv) si hubiera sido víctima de robo, como señaló, habría presentado una denuncia, pero no lo hizo.

Toda esta información, al confrontarse con el hallazgo de la embarcación de los brasileños y el relato coherente, verosímil y secuencial del coimputado Jaime Vargas Arirama, determinan la responsabilidad del impugnante en el delito de homicidio calificado con arma de fuego (escopeta), y la sustracción del dinero que tenía la embarcación de los agraviados brasileños (dos mil quinientos reales de Brasil y ciento veinte dólares estadounidenses).

18. El tercer motivo, está vinculado con la muerte de los agraviados. Se sostiene que no está acreditada la muerte de estos, pues en autos no consta acta de levantamiento de cadáver o necropsia. Este Tribunal Supremo discrepa del reclamo, en la medida que debe valorarse la forma, circunstancias y lugar donde ocurrieron los hechos.

Los agraviados estuvieron en la espesura de la selva, sin mayor tráfico de embarcaciones por el lugar donde navegó su bote. Esta circunstancia fue aprovechada por el recurrente y los otros coprocesados, para atentar contra la vida y el patrimonio de los agraviados, sin dejar mayor rastro que el estado real de la embarcación a la fecha que se realizó el hallazgo. Los cuerpos fueron arrojados al río Yavarí en la selva, como así lo ha señalado el hoy sentenciado Vargas Arirama, y quien incluso aceptó los cargos en su contra, sometién dose a los alcances de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós. Entonces, al haber sucedido los hechos en un lugar que se hace



inaccesible encontrar los cuerpos y dado la variedad de ecosistemas climáticas, y de biodiversidad de especies de animales y plantas entre otros, con presencia de depredadores, es evidente que su ubicación no ha sido posible, pero esto no es fundamento para alegar que no existen los cuerpos de los agraviados, cuando a la fecha han transcurrido más de diez años a la data de los hechos y nunca aparecieron los cuerpos de las víctimas.

En todo caso, no se incorporó por la defensa, alguna evidencia que revele que están vivos los agraviados, más aun si el relato del coimputado Jaime Vargas Arirama tanto en su declaración policial y en el sumario judicial, fue claro al informar que los agraviados Antonio de Paula Campos y José Batista Guerreiro están muertos. Además, de conformidad con el artículo sesenta y tres del Código Civil, ante hechos como el que nos ocupa el referido dispositivo incorporó el supuesto jurídico de muerte que se da en dos supuestos: 1. cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si este tuviere más de ochenta años de edad; y 2. cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte, siendo este último supuesto que se daría en el caso concreto.

19. En el presente caso, ya han transcurrido más de diez años desde que los agraviados están desaparecidos. Su desaparición, se dio en circunstancias constitutivas de peligro de muerte, como claramente se advierte de su embarcación que se encontraba en estado de abandono, y la sindicación verosímil del sentenciado Vargas Arirama, cuando señaló que arrojaron los cuerpos sin vida de los agraviados y aun cuando sus cuerpos no fueron rescatados, ello no significa que el homicidio en su contra, no sucedió. Por lo tanto, la muerte de los agraviados de nacionalidad brasileña a título de dolo queda probada. Y por ello, el motivo se rechaza.

20. En el cuarto motivo, alegó que no existe la preexistencia de los bienes materia de robo. Es cierto que no obran documentos que revelen la existencia física del dinero materia de robo. Sin embargo, de acuerdo a la forma y circunstancias de cómo sucedieron los hechos, no es necesario

acreditar documentariamente la preexistencia del bien materia de sustracción, pues acá debe valorarse otros factores, como el relato del coimputado Jaime Vargas Arirama quien narró reiterativamente que sustrajeron el dinero que había en la embarcación de los agraviados.

21. Efectivamente, clara muestra de ello, es el estado de abandono de la embarcación, con diferentes bienes de naturaleza comestible, como se verifica de las fotografías de páginas sesenta y seis y sesenta y siete, siendo evidente que el robo no estuvo dirigido a la embarcación, ni a sus piezas, ni los productos comestibles que cargaba, sino única y exclusivamente al dinero que tenía en cajas, como claramente narró el hoy sentenciado Vargas Arirama, que dieron muerte a los agraviados y sustrajeron el dinero que tenían en una caja, y luego se repartieron. Se reitera, que por la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos hace que este reclamo no prospere.

22. Finalmente, el último reclamo está vinculado a la calificación que se le ha dado a los delitos materia de juzgamiento. Sostiene que el delito de homicidio calificado está subsumido en el delito de robo agravado, pues la finalidad era el robo no el asesinato. El fiscal supremo en lo penal señaló en su dictamen que los hechos debieron ser calificados como robo agravado con subsecuente muerte. Sin embargo, de acuerdo al cuadro fáctico propuesto por el fiscal superior y que han merecido condena, primero se asesinó a los agraviados y luego se apoderaron de su pertenencias.

23. Al respecto, el Acuerdo Plenario número tres-dos mil dieciocho/CJ-ciento dieciséis, en su fundamento siete aclara el panorama sobre este punto. Señaló:

El artículo 189 *-in fine-* CP prevé una circunstancia agravante de tercer grado para la figura delictiva del robo. Esta se configura cuando el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es obvio, en este caso, que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima, pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella *-de los actos propios de violencia o vis in corpore-* le causa la muerte, resultado



que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado sólo se le puede atribuir al agente a título de culpa.

Se ve con claridad que la nota esencial, lo constituye el aspecto subjetivo en el actuar del agente, que respecto al homicidio debe ser culposos, lo que no ocurrió en el caso.

24. Además de ello, este Tribunal Supremo considera que estamos ante un concurso real de delitos, previsto en el artículo cincuenta del Código Penal, que se produce cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. No puede afirmarse que la finalidad era solo el robo agravado, para ello, es relevante la información secuencial de los hechos suministrados por el coimputado Vargas Arirama. En principio, no empezaron la ejecución del supuesto de hecho del tipo penal de robo (apoderamiento), sino procedieron como primer comportamiento doloso dar muerte a los agraviados, pese a que olo eran dos y sin portar armas letales, frente a cinco personas que iban a perpetrar el delito.

25. Ahora, se tiene en cuenta por la propia versión del sentenciado Vargas Arirama que cuando interceptaron la embarcación de frente dispararon a los cuerpos de los agraviados y les quitaron la vida; y ya después precedieron a sustraer el dinero. Esto revela que no se dieron los supuestos que exige el referido acuerdo plenario y por lo tanto sin menor duda se configura un concurso real entre los delitos materia de condena, que vulneraron dolosamente bienes jurídicos de manera secuencial: la vida y el patrimonio. Por ello, es que la calificación individual de cada delito por el que ha sido condenado el recurrente se encuentra arreglada a ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: **NO HABER NULIDAD** en la sentencia del uno de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Loreto -de páginas trescientos ochenta y ocho a cuatrocientos siete-, que condenó a **ELOY CARITIMARI ARIRAMA**, por delito de homicidio



calificado y robo agravado, en perjuicio de Antonio de Paula Campos y José Batista Guerrero, a treinta años de pena privativa de libertad; y ocho mil soles que por concepto de reparación civil deberá abonar a los deudos de los agraviados; con lo demás que contiene y los devolvieron.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por licencia del juez supremo Lecaros Cornejo.

S. S.

FIGUEROA NAVARRO

QUINTANILLA CHACÓN

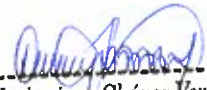
CASTAÑEDA ESPINOZA

PACHECO HUANCAS

BERMEJO RÍOS

IEPH/rvz

SE PUBLICO CONFORME A LEY



Diny Yuranieva Chávez Veramendi
Secretaria (e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

16 SET. 2019